

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



Medellín, trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

**AUTO**

Para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se le reconoce personería a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S. representada legalmente por el señor Richard Giovanny Suarez Torres identificado con cédula de ciudadanía 79.576.294 y tarjeta profesional 103.505 del Consejo Superior de la Judicatura, quien además actúa como apoderado judicial inscrito en el certificado de Cámara de Comercio de dicha sociedad, y por sustitución de éste se le reconoce personería al doctor Cristian Alexander Patiño identificado con cédula de ciudadanía 71.273.135 y tarjeta profesional 297.694 del Consejo Superior de la Judicatura.

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario con radicado único nacional número 05 001 31 05 011 2017 00138 00 promovido por la señora **OLIVIA ESTER NARANJO MORALES** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Colpensiones frente a la sentencia emitida el 4 de mayo de 2018 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, y revisar en

consulta la misma providencia en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **091**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### **ANTECEDENTES**

La señora Olivia Ester Naranjo Morales, demandó a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del pensionado Ignacio de Jesús Aguirre Álzate; intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones le concedió al señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate la pensión de vejez, por medio de la Resolución 11064 de 2004, a partir del 1° de julio de la misma anualidad. El citado pensionado falleció el 7 de enero de 2008. A través de la Resolución 12957 de 2008 el ISS le reconoció la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del causante a la señora Juana Díaz de Aguirre en calidad de cónyuge. Aduce que convivió con el señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate, su compañero permanente compartiendo techo y mesa desde 1790 hasta la fecha de su fallecimiento. De dicha unión procrearon 2 hijos Jorge Ignacio (fallecido) y Sandra Tatiana (mayor de edad). La señora Juana Díaz de Aguirre falleció el 21 de enero de 2014. Agrega que el 24 de agosto de 2016, reclamó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, y la entidad por medio de la Resolución GNR 299798, confirmada en las Resoluciones GNR 379077 de 13 de diciembre de 2016 y VPB 2576 de 23 de enero de 2017, se la negó.

En sentencia proferida el 4 de mayo de 2018, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Olivia Ester Naranjo Morales, lo siguiente: pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su compañero permanente Ignacio de Jesús Aguirre Álzate, a partir del 22 de enero de 2014 sobre 14 mesadas pensionales, en un porcentaje del 100%; la suma de \$57.985.217 por retroactivo pensional causado hasta el 31 de mayo de 2018; la suma de \$1.073.849 por mesada pensional a partir del 1° de junio de 2018; indexación del retroactivo pensional y costas del proceso. Autorizó a Colpensiones para descontar los aportes en salud del retroactivo pensional reconocido.

El Juzgador de primera instancia para motivar su decisión precisó que la norma aplicable al caso concreto es la contenida en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que la señora Olivia Ester Naranjo Morales en calidad de compañera permanente debe acreditar no menos de 5 años de convivencia con el causante con anterioridad al fallecimiento. Que, respecto del requisito de la convivencia, el mismo se encuentra acreditado con los testimonios de las señoras Olga Margarita Blandón Usme y Blanca Nury Castaño Serna quienes por razones de vecindad y amistad dan certeza suficiente al Despacho para acceder a la prestación toda vez que de manera coherente afirmaron que la demandante convivió bajo el mismo techo con el causante como compañeros de forma permanente por más de 5 años anteriores al deceso de aquel. Que la pensión de sobrevivientes le fue reconocida a la señora Juana Díaz de Aguirre en calidad de cónyuge del finado hasta el 21 de enero de 2014, por ende, conforme lo previsto en el artículo 1634 del Código Civil que refiere al pago hecho de buena fe a persona que estaba en posición del crédito válido, aunque después aparezca que el mismo no le pertenecía, habrá de ordenarse el pago del derecho pensional en favor de la actora a partir del 22 de enero de 2014 día siguiente al fallecimiento de la señora Juana Díaz de Aguirre.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

El apoderado de Colpensiones no comparte la decisión de primera instancia pues la entidad mediante Resolución 12957 de 2008 ya reconoció la pensión de

sobrevivientes derivada del fallecimiento del señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate a su cónyuge la señora Juana Díaz de Aguirre, previa publicación en aviso de prensa emplazando a todo el que tuviera igual o mejor derecho, sin que se hubiera presentado la señora Olivia Ester Naranjo Morales a reclamar tal prestación.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

El apoderado de la demandante solicitase confirme la decisión de primera instancia en cuanto se concedió la pensión de sobrevivientes, precisando que el retroactivo pensional se debe reconocer desde el 7 de enero de 2008, fecha del fallecimiento del causante.

La apoderada de Colpensiones presentó oportunamente escrito de alegatos de conclusión haciendo referencia a los mismos argumentos del recurso de alzada.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico, de esta segunda instancia, consiste en determinar si a la señora Olivia Ester Naranjo Morales, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente derivada del fallecimiento del pensionado Ignacio de Jesús Aguirre Álzate, el retroactivo pensional e indexación.

### **CONSIDERACIONES**

Examinada en conjunto la prueba documental que milita en el expediente. La Sala encuentra:

1. Que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones por medio de la Resolución 11064 de 2004 le concedió al señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate la pensión de vejez a partir del 1° de julio de la misma anualidad, en cuantía de \$721.615 y que para la nómina de 2008 ascendía a \$881.441.
2. Que el señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate falleció el 7 de enero de 2008.

3. Que a través de la Resolución 12957 de 2008, el ISS le reconoció la sustitución pensional con ocasión del deceso del señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate a la señora Juana Díaz de Aguirre en calidad de cónyuge.
4. Que el 24 de agosto de 2016, la señora Olivia Ester Naranjo Morales le reclamó a Colpensiones la sustitución pensional invocando la calidad de compañera permanente del causante, y la entidad por medio de la Resolución GNR 299798 de 11 de octubre de 2016, confirmada en las Resoluciones GNR 379077 de 13 de diciembre de 2016 y VPB 2576 de 23 de enero de 2017, le negó la prestación aduciendo que *“...la solicitud de la señora Naranjo Morales Olivia Ester no puede ser estudiada conforme a la anterior disposición debido a que el derecho ya fue otorgado mediante Resolución 12957 de 2008, ya que la morosidad o desidia en reclamar un derecho, es castigada en nuestra legislación con la extinción del mismo por prescripción o la caducidad de la acción para reclamarlo, debido a que una vez se realiza solicitud de pensión de sobrevivientes se procedió a realizar la publicidad señalada en la Ley a través del EDICTO EMPLAZATORIO, a fin de todas las personas que se creyeran con derecho se hicieran presentes en el trámite de reclamación pensional, y la señora Naranjo Morales Olivia Ester acudió reclamar el mismo derecho, cuando ya había precluido el término para hacerlo ... Que el acto administrativo 12957 de 2008, mediante el cual se reconoció la sustitución pensional se encuentra en firme, pues no existe pronunciamiento de Juez Administrativo alguno por lo que tiene plenos efectos jurídicos y no es posible revocarse, al no encontrarse bajo ninguna causal establecida en la Ley 1437 de 2011...”*.
5. Que los señores Olivia Ester Naranjo Morales e Ignacio de Jesús Aguirre Álzate procrearon 2 hijos: Jorge Ignacio Aguirre Naranjo, nacido el 25 de septiembre de 1975 y fallecido el 16 de noviembre de 1990, y Sandra Tatiana Aguirre Naranjo, nacida el 14 de febrero de 1983.
6. Que la señora Juana Díaz de Aguirre falleció el 21 de enero de 2014.

## DEL DERECHO PENSIONAL

Sea lo primero indicar, que el trámite de reconocimiento de una prestación desde el punto de vista administrativo, se encuentra establecido en la Ley 1204 de 2008, la cual, establece el procedimiento que debe llevarse a cabo por parte del solicitante, sin embargo, ello no es óbice para que, mediante acción judicial se peticione la reclamación de dicho derecho, pues la norma descrita tiene como propósito agilizar el reconocimiento de la pensión en cabeza de los beneficiarios y proveerles los recursos que en atención al cumplimiento de la contingencia se encuentra diezmado, siendo en sentido estricto dicho reconocimiento provisional, pues en el mismo pliego normativo se informa que al haber controversia del derecho, el asunto debe ser dirimido por la jurisdicción, regla que ya había sido impuesta por el artículo 34 del Decreto 758 de 1990, precepto que en su momento indicó:

*“...ARTÍCULO 34. CONTROVERSLA ENTRE PRETENDIDOS BENEFICIARIOS. Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de las prestaciones, se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho.*

*Lo anterior, sin perjuicio a que cuando se acredite legalmente la existencia de dos o más matrimonios y no hubiere separación legal respecto a uno de ellos se le concederá la pensión al primer cónyuge...”*

En sentencia SL 226 de 2021 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indicó respecto a la firmeza del reconocimiento prestacional en sede administrativa:

*“...Con todo, no puede concluirse como lo sugiere la entidad recurrente, que el agotamiento del procedimiento administrativo sea concluyente en la definición del derecho pensional o altere sus efectos económicos, pues por tratarse de una prestación de rango fundamental, que tiene como propósito proveer el apoyo monetario para aquellos que dependían económicamente del causante, evitando que queden sin un ingreso que les permita subsistir por el acaecimiento de un suceso intempestivo, como la muerte de quien velaba por ellos, la disputa o reconocimiento definitivo puede hacerse en cualquier tiempo, y por ello, se le reconoce su carácter imprescriptible, no así las mesadas, las cuales son objeto de dicho fenómeno...”*

Igualmente se precisó en sentencia SL 4559 de 2019, el carácter irrenunciable de los derechos que emanan de la seguridad social, entre ellos indudablemente las pensiones así:

“...No obstante, cabe resaltar que ciertos derechos de la seguridad social, importantes para el tejido social, como son las pensiones de vejez, sobrevivencia e invalidez, son imprescriptibles. Así, se desprende del artículo 48 de la Constitución Política, cuyo texto le otorga a los derechos subjetivos emanados de la seguridad social el carácter de irrenunciabiles, lo que significa que pueden ser justiciados en todo tiempo.

De esta manera, esta Corporación ante renovados y sólidos argumentos ha señalado que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL, la actualización de la pensión, el derecho al reajuste pensional por inclusión de nuevos factores salariales y la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, no se extinguen por el paso del tiempo, pues constituyen aspectos ínsitos al derecho pensional (CSJ SL 23120, 19 may. 2005; CSJ SL 28552, 5 dic. 2006; CSJ SL 40993, 22 en. 2013; CSJ SL6154-2015, CSJ SL8544-2016, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019).

Así, al ser la seguridad social un derecho subjetivo de carácter irrenunciable, es exigible judicialmente ante las personas o entidades obligadas a su satisfacción. Luego, es una prerrogativa que no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades...”.

No se puede dejar de lado, que el Código General del Proceso establece respecto a las sentencias que no constituyen cosa juzgada:

*“...ARTÍCULO 304. No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias:*

- 1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las que por su naturaleza no sean susceptibles de ser modificadas.*
- 2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por autorización expresa de la ley.*
- 3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento...”.*

Conforme la normatividad y la jurisprudencia citadas, no es de recibo, la manifestación realizada por el procurador judicial de Colpensiones respecto a la inmutabilidad del status pensional de la señora Juana Díaz de Aguirre, pues como se explica, es precisamente el escenario judicial que nos atañe, el indicado para resolver de fondo quien es beneficiario de la prestación.

Luego, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

El registro civil de defunción que milita en el expediente informa que el señor Jorge Ignacio Aguirre Naranjo falleció el 7 de enero de 2008, por ende, las normas aplicables al caso concreto son las contenidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Conforme al artículo 12, cuando un pensionado fallece, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros de su grupo familiar, y según el artículo 13, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite que a la fecha de fallecimiento del causante tenga 30 años o más de edad, siempre y cuando acredite que estuvo haciendo vida marital con el fallecido hasta la fecha de su muerte y convivió con él no menos de cinco años continuos con anterioridad a su deceso, y de manera temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite que a la misma fecha tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con éste.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL 32393 de 20 de mayo de 2008, SL 45600 de 22 de agosto de 2012, SL 793 de 2013, SL 1402 de 2015, SL 14068 de 2016 y SL 347 de 2019, fue enfática en señalar, que la Ley 797 de 2003 exige una convivencia mínima para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para cónyuge como para compañero o compañera permanente, de cinco años, independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado.

Bajo el contexto anterior, en la sentencia SL 1399 de 25 de abril de 2018, el Alto Tribunal mencionado explicó con detalle los distintos escenarios dispuestos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificadorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, enfatizando que, el elemento preponderante para la titularidad de éste



derecho, es la convivencia, que inexorablemente debe ser de 5 años, como mínimo, así el causante tenga la condición de pensionado, o afiliado al sistema y lo explicó así:

“...2. El requisito común e inexcusable del derecho a la pensión de sobrevivientes: la convivencia durante mínimo 5 años:

## 2.1 La noción de convivencia

Según la disposición reproducida la convivencia por un lapso no inferior a 5 años es transversal y condicionante del surgimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, tanto en beneficio de los (las) compañeros (as) permanentes como de los cónyuges (SL4925-2015). Por convivencia ha entendido la Corte que es aquella «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva-durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605)

Así, la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida...”.

La Corte Constitucional por su parte como órgano de interpretación normativa a la luz de la Constitución Nacional, en la sentencia SU - 149 de 2021 explicó que el requisito de convivencia de 5 años debe entenderse tanto para afiliados como para pensionados, pues ello ha sido planteado así desde la sentencia C - 336 de 2014.

En la sentencia SU - 108 de 2020 la Corporación citada trató el mérito de los elementos probatorios respecto a la convivencia, explicó respecto a dicho tópico que, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los requisitos de vida marital y cohabitación deben ser evaluados *“en cada caso, y dependiendo de las circunstancias fácticas que se prueben”*, dado que serán estas a las que *“tendrá que acudir, para determinarse si la separación material era o no justificada y si, a pesar de ello, el vínculo entre la pareja se mantuvo”*.

Ahora, en las sentencias SL 5151 de 2019, SL 1869 de 2020, SL 2746 de 2020 y SL 093 de 2021, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación

señaló que si bien la Corporación en la interpretación del literal a. del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha entendido que tanto la cónyuge como la compañera permanente deben cumplir con el requisito de convivencia hasta la muerte y por un lapso no inferior a 5 años continuos con anterioridad al fallecimiento, cuando ocurra la muerte del pensionado, en una interpretación armónica con el inciso 3 del literal b. *ibídem*, tratándose del evento del cónyuge separado de hecho, ha precisado que la convivencia de los 5 años puede verificarse *en cualquier tiempo*. Esto, por cuanto el legislador, cuando se refiere a la posibilidad del cónyuge de acceder al beneficio prestacional periódico cuando medie «*separación de hecho*», naturalmente presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte. En dicho sentido, se protege a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social. Por manera que, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes frente a la adquisición del derecho.

De otro lado, en torno al adecuado entendimiento de dicho precepto legal, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido, de vieja data, que el término de convivencia, que en el marco de la seguridad social permite acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes, en tratándose de cónyuges o compañeros (as) permanentes, hace referencia a la vida común en pareja, caracterizada por lazos de amor, solidaridad, afecto, colaboración y apoyo mutuo, con vocación de formar una familia, entendida entonces como la «efectiva comunidad de vida, construida sobre una real convivencia de la pareja, basada en lazos de afecto y el ánimo de brindarse sostén y asistencia recíprocos» (Sentencias SL de 29 noviembre de 2011, radicado 40.055; SL 4549 de 2019, radicado 68.689 y SL 3861 de 2020).

El Alto Tribunal en la sentencia SL 6286 de 2017, radicado 62.413, resaltó que: “...En la perspectiva trazada, de tiempo atrás tiene dicho la Sala que en el caso concreto del cónyuge y los compañeros permanentes el concepto de convivencia comprende circunstancias que van más allá del meramente económico, pues implica el acompañamiento espiritual permanente, proyecto familiar

*común, apoyo económico, el compartir la vida de pareja y la cohabitación bajo el mismo techo, que es la regla...”.*

A juicio de la Corporación más allá de la situación formal existente entre la pareja, lo que determina el derecho a la pensión de sobrevivientes es una convivencia real, bajo las características anotadas, en tanto adquiere “...una connotación eminentemente material en oposición a los aspectos meramente formales del vínculo, además de que, jurídicamente hablando, debe ser estable, permanente y lo suficientemente sólida para consolidar un grupo familiar, que es el objeto de protección constitucional y legal...”. (Sentencias SL 11940 de 2017, radicado 47.913 y SL 3861 de 2020).

En ese orden de ideas, teniendo presentes las reflexiones anteriores, que son acogidas por esta Sala en este asunto, conforme al material probatorio se analizará el requisito de convivencia respecto de la señora Olivia Ester Naranjo Morales por un lapso no inferior a 5 años continuos con anterioridad al fallecimiento del pensionado Ignacio de Jesús Aguirre Álzate.

Sea lo primero indicar que en el interrogatorio de parte absuelto por la señora Olivia Ester Naranjo Morales, afirmó que convivió con el señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate desde 1972 hasta 2008 cuando falleció y que nunca se llegaron a separar. Que conoció a la señora Juana Díaz de Aguirre, la esposa del causante, con quien afirma solo convivió 8 años, que los cónyuges tuvieron 2 hijos, uno ya fallecido y la otra mayor de edad, y que nunca la desafilió del seguro como beneficiaria. Aduce que no reclamó la pensión de sobrevivientes con anterioridad porque le dio miedo, pues el día del velorio de su compañero, la señora Juana dijo que ella era la única que tenía el derecho por ser la esposa, y que, en razón del fallecimiento de la citada, decidió solicitar la prestación.

Ahora, se procedió con el análisis de los testimonios de las señoras Olga Margarita Blandón Usme y Blanca Nury Castaño Serna, allegadas por la demandante, con el fin de verificar si resulta conducente para orientar el convencimiento de la Sala en torno a la existencia del referido requisito de la convivencia entre la reclamante y

el causante, y para ello se acogió las directrices plasmadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil<sup>1</sup>.

La declarante Olga Margarita Blandón Usme, adujo que conoce a la señora Olivia Ester Naranjo Morales y conoció al señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate por razones de vecindad y amistad desde hace más de 30 años, que los citados no eran casados, pero vivían en unión libre, que procrearon 2 hijos: María Tatiana y Jorge Ignacio, que para el 7 de enero de 2008 fecha del fallecimiento del señor Ignacio de Jesús, este convivía con la actora, que la pareja tuvo una convivencia permanente durante 39 años. Y agrega que no conoció a la señora Juana Díaz de Aguirre, ni sabía que era la cónyuge del causante, pero supo que con la mencionada esposa tuvo una hija: Lina María (mayor de edad), quien visitaba el hogar de la pareja.

La deponente Blanca Nury Castaño Serna, señaló que conoce a la señora Olivia Ester Naranjo Morales porque sus hijos y los de ella nacieron y estudiaron juntos y que conoció al señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate porque era compañero de trabajo de su esposo y tocaban guitarra, además por ser vecinos, que los mencionados convivieron juntos más de 30 años de manera permanente y desconoce que se hayan llegado a separar, que de dicha unión procrearon 2 hijos: Tatiana (mayor de edad) y Jorge Ignacio (fallecido). Manifestó, además, que conoció a la señora Juana Díaz de Aguirre en el velorio del señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate y sabía que era la esposa y que los cónyuges tuvieron una hija: Lina María (mayor de edad).

Luego, tal y como lo ha precisado la Sala Laboral del órgano de cierre de esta jurisdicción, lo que quiso amparar el legislador, de cara a la prestación pensional de sobrevivientes, es la perdurabilidad, de manera patente, de la «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable (...)»<sup>2</sup>, comunidad que quedó evidenciada en el caso de la accionante, máxime si se tiene en cuenta que las

---

<sup>1</sup> En la sentencia 4978 del 5 de mayo de 1999

<sup>2</sup> CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605; SL7299-2015; SL1399-2018

testigos Olga Margarita Blandón Usme y Blanca Nury Castaño Serna, con conocimiento de causa por la relación de vecindad y amistad, que tenían con los compañeros permanentes, ciertamente describen con espontaneidad, credibilidad, claridad y coherencia como era la relación de los señores Olivia Ester Naranjo Morales e Ignacio de Jesús Aguirre Álzate, dan las razones y ciencia de sus dichos, describiendo el hogar de la pareja informando las circunstancias de tempo, modo y lugar que les constaba directamente frente a la convivencia marital permanente e ininterrumpida, por más de cinco años hasta el momento de la muerte del finado acaecida el 7 de enero de 2008.

Declaraciones que a la luz de la sana crítica devienen para la Sala totalmente admisibles y creíbles, y coinciden con lo afirmado por la demandante en el interrogatorio de parte y en el libelo.

Así las cosas, conforme al material probatorio analizado en conjunto encuentra esta Sala plenamente acreditado el requisito de convivencia entre los señores Olivia Ester Naranjo Morales e Ignacio de Jesús Aguirre Álzate, entendiéndolo como la conformación de una familia con vocación de permanencia, por lo menos desde 1978 y hasta el 7 de enero de 2008, es decir, por un tiempo superior a los 5 años anteriores a la fecha de fallecimiento del causante, evidenciándose esos “...*lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, distintivos de la real convivencia entre una pareja...*”<sup>3</sup>, y en todo caso, la convivencia se encontraban vigente al momento del deceso del pensionado.

En consecuencia, la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes de origen común reclamada, por las razones expuestas.

## **DE LA PRESCRIPCIÓN**

En lo que respecta a la prescripción, conforme a lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en tres años, que se cuentan desde que la respectiva

---

<sup>3</sup> Ver Sentencia CSJ SL 1399-2018

obligación se hace exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador sobre el derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

El artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el mismo texto alusivo a la interrupción de la prescripción.

Según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que esta Sala de Decisión comparte, el análisis consonante de los preceptos lleva a concluir que únicamente es posible interrumpir la prescripción una vez. (Sentencia de 21 de febrero de 2012, Radicado 41.908 y SL 374 de 12 febrero de 2020, Radicado 67.868).

La prueba documental da cuenta que si bien el señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate falleció el 7 de enero de 2008, la reclamación se presentó el 26 de agosto de 2016 y la demanda se radicó el 23 de febrero de 2017, y en principio habría lugar a declarar prescritas las mesadas pensionales causadas antes del 26 de agosto de 2013; lo cierto es que el juez *A quo* consideró que a la demandante le asiste derecho al retroactivo pensional a partir del 22 de enero de 2014 un día después de cuando falleció la señora Juana Díaz de Aguirre falleció, por ende, no operó en este juicio el fenómeno de la prescripción.

## **DE LA LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN**

Liquidada las mesas pensionales determinadas por el *a quo*, virtud del grado jurisdiccional de consulta, en favor de la administradora pública de pensiones, no se observa que el valor de las mismas resultará inferior a la sumas objeto de condena.

## **DE LA MESADA 14**

El inciso 8 y el Parágrafo Transitorio 6° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 prescriben que las personas cuyo derecho a la pensión se consolide a partir

de la vigencia de dicho acto, no pueden recibir más de trece mesadas pensionales, excepto aquellas que perciban una pensión igual o inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la prestación se causa antes del 31 de julio de 2011.

El Acto Legislativo aludido se expidió el 25 de julio de 2005. El señor Ignacio de Jesús Aguirre Álzate falleció el 7 de enero de 2008. Por ende, la accionante tiene derecho al pago de catorce mesadas como lo dispone la referida normatividad.

Luego, se tiene que el apoderado judicial de la demandante en el escrito de alegatos de conclusión precisa que el retroactivo pensional debe ser reconocido desde el 7 de enero de 2008, fecha del fallecimiento del pensionado, solicitud que en criterio de la Sala no resulta procedente, en la medida que el A quo condenó al retroactivo pensional a partir del 22 de enero de 2014, decisión que no fue recurrida por la parte actora, pues no presentó inconformidad alguna frente a la sentencia de primera instancia.

Es de anotar, además, que en este proceso se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Colpensiones y se analiza en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de dicha entidad, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Consecuente con ello, la viabilidad o no del retroactivo pensional desde el 7 de enero de 2008 es un asunto que debió plantearse en la oportunidad procesal, esto es, mediante el recurso de apelación, de manera que una decisión en esta superioridad en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia, por lo que lo resuelto por el A quo en este aspecto se dejará incólume.

Revisada la liquidación efectuada por el Despacho del retroactivo pensional causado entre el 22 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2018, no merece reparo alguno. Por ende, se confirmará en este aspecto la decisión.

## **DE LOS APORTES EN SALUD**

Conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, la cotización para salud establecida en el Sistema General de Salud para los pensionados está en su totalidad a cargo de éstos.

Acorde al criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que esta Sala de Decisión comparte, el descuento por salud constituye una condición esencial y necesaria al reconocimiento de la pensión, que opera por virtud de la Ley y se encuentra estrechamente relacionada con los principios que irradian el Sistema General de Seguridad Social, motivo por el cual el Juez al otorgar el derecho está facultado para autorizarla, porque el pagador de la entidad administradora es el llamado a hacerla efectiva y trasladarla a la EPS correspondiente (sentencias de 21 de junio de 2011, radicado 48.003; 14 de febrero de 2012, radicado 47.378; 6 de marzo de 2012, radicado 47.528 y SL 1478 de 9 de mayo de 2018, radicado 63.512).

A juicio de la Corporación mencionada, de no efectuarse tales descuentos, se desconocerían los principios orientadores de la prestación del servicio público esencial de seguridad social consagrados en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, en especial, los de universalidad y solidaridad, y los rectores del servicio público de la seguridad social en salud de que trata específicamente el Decreto 1920 de 1994. Adicionalmente, tal omisión podría comprometer los derechos de acceso a los servicios de alto costo que requieren un mínimo de semanas cotizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, se confirmará en este sentido la providencia.

## **DE LA INDEXACIÓN**

La indexación de la condena sobre el retroactivo pensional reconocido resulta viable, porque es el mecanismo objetivo de corrección monetaria que se aplica cuando las entidades administradoras que integran el sistema de seguridad social



pagan tardíamente las obligaciones a su cargo, y la ley no prevé otra forma de solucionar su detrimento económico. Por lo tanto, se confirmará en este punto la decisión.

En consideración a que la indexación se concede en favor de la actora, se precisa que sobre la suma que ha de efectuarse el descuento en salud no está sujeta a tal actualización, por tanto, dichos valores no serán objeto de aplicación de la misma, pues no puede la accionante beneficiarse de una actualización con base en una suma dineraria que corresponde al subsistema de salud.

### **DE LAS COSTAS.**

Ante la desventura del recurso de apelación las costas en ambas instancias corren en favor de la señora Olivia Ester Naranjo Morales y a cargo de Colpensiones.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

Así las cosas, se confirmará y aclarará la decisión que se revisa en apelación y consulta, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

**PRIMERO:** Confirmar la decisión de primera instancia que se revisa en apelación y consulta, con la aclaración que sobre la suma que ha de efectuarse el descuento en salud no está sujeta a la indexación.

**SEGUNDO:** Ante la desventura del recurso de apelación las costas en ambas instancias corren en favor de la señora Olivia Ester Naranjo Morales y a cargo de Colpensiones.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **06f7ad9c29e429257710b0b95b81a44f84a0b073d22b2cee385f3601b65a667d**  
Documento generado en 13/04/2023 02:11:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>